



SALA QUINTA DE DECISIÓN LABORAL

Decisión No. 115

Medellín, seis (06) de julio de dos mil veintiuno (2021).

El Tribunal Superior de Medellín, Sala Quinta de Decisión Laboral, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 del Decreto Legislativo No. 806 del 04 de junio de 2020, procede a proferir el fallo dentro de este proceso ordinario promovido por **HILDUARA DEL SOCORRO NARANJO** contra **LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.** y como Litis consorte necesario al **MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO** y **LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO -HOSPITAL CARMEN DE AMALFI.**

A continuación, la Sala, previa deliberación del asunto, según consta en el Acta No. 049 de discusión de proyectos, adoptó el presentado por el ponente que se consigna enseguida:

Manifestó la demandante por intermedio de su apoderada judicial que nació el 10 de marzo de 1960; que inició su vida laboral al servicio público el 15 de abril de 1979 trabajando hasta el 18 de diciembre de 1995; laboró en diferentes empresas hasta septiembre del año 2017 y una vez consideró que contaba con los requisitos para pensionarse solicitó la prestación, negándosele; que posteriormente solicitó la proyección pensional de su mesada, recibiendo respuesta de lo que sería su prestación a los 60 años de edad, desconociéndosele el bono pensional; continuó contando que el fondo privado emitió información de la historia laboral, reconociendo el

bono en el sector público en semanas, arrojando un total de 1.966, pero al momento de estimar el saldo en la cuenta individual aduce que solo cuenta con \$129'572.886, monto insuficiente para pensionarse sin tener en cuenta el valor del bono pensional, evidenciándose la intención de desinformarla. Finaliza diciendo que Protección establece arbitrariamente como fecha para la redención del bono el 10 de marzo de 2020.

Con base en los hechos expuestos, solicita que se declare que Protección obró de manera negativa al desconocer el valor del bono pensional correspondiente al tiempo trabajado con el Estado, consecuentemente es obligación de Protección hacer el trámite interadministrativo para el cobro y cálculo del bono pensional para lograr un saldo real de la cuenta de ahorro individual. Pide se condene a Protección a reconocerle la pensión de vejez desde el 8 de septiembre de 2017, teniendo en cuenta el ahorro individual con sus respectivos rendimientos financieros, intereses moratorios y costas procesales.

La apoderada de **PROTECCIÓN S.A.** se opuso a la prosperidad de las pretensiones y propuso las excepciones de: PETICIÓN ANTES DE TIEMPO, FALTA DE CAUSA PARA PEDIR Y BUENA FE.

Se integró como Litis consorte necesario al MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (fls.33), quien por medio de apoderado judicial se opuso a la prosperidad de las pretensiones y propuso las excepciones de: FALTA DE INTEGRACION DEL LITIS CONSORTE NECESARIO, BUENA FE E Y LA GENERICA.

Se integró, además, como litis consorte necesario a LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL CARMEN DE AMALFI (fls.95), quien por medio de apoderado judicial se opuso a la prosperidad de las pretensiones y propuso las excepciones de: INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN POR PARTE DE LA ESE HOSPITAL EL CARMEN DE AMALFI, CUMPLIMIENTO DE EMISIÓN DE BONO PENSIONAL, BUENA FE, COBRO DE LO NO DEBIDO, FALTA DE CAUSA PARA DEMANDAR A LA E.S.E HOSPITAL EL CARMEN DE AMALFI, COMPENSACIÓN Y PAGO, PRESCRIPCIÓN, FALTA DE LEGITIMACIÓN POR PASIVA Y LA GENÉRICA.

EL JUZGADO OCTAVO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, declaró que a la demandante le asiste derecho al reconocimiento y pago de la pensión de vejez. Condenó a la Empresa Social del Estado ESE HOSPITAL EL CARMEN DE AMALFI -ANTIOQUIA a trasladar a Protección S.A. con base en el cálculo actuarial que el fondo de pensiones efectúe, la suma correspondiente al tiempo laborado entre el 15 de abril de 1979 y el 30 de mayo de 1994, representada en título pensional, dentro del término de 30 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia. Condenó a Protección S.A. al reconocimiento y pago de la pensión de vejez, a partir del 9 de septiembre de 2017, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 64 y 65 de la ley 100 de 1993, sin que sea necesaria la expedición del título, indexación de las condenas y costas procesales. Absolvió a la Nación-Ministerio de Hacienda y crédito público de todas las pretensiones formuladas en su contra.

IMPUGNACIÓN

Interpuso recurso de apelación el abogado Protección S.A., quien manifiesta que la juez, al ordenar el pago del cálculo actuarial al hospital de Amalfi, acepta que las pensiones en el RAIS por los tiempos en los cuales se prestan estos servicios debe financiarse por medio de bono pensional, como se le informó a la demandante en el comunicado del 11 de septiembre y 17 de noviembre de 2017, sin embargo la funcionaria declaró que a la demandante le asiste derecho a la pensión de vejez desde el 9 de septiembre de 2017 bajo los presupuestos normativos de los artículos 64 y 65 de la ley 100 de 1993, sin que esto sea viable, ya que para ese momento la actora no cumplía con los requisitos que exigen, que en la cuenta del régimen de ahorro individual exista un capital suficiente para financiar el 110% de un salario mínimo, no contando la demandante con el capital para ese momento. También se debe tener de presente que la redención del bono pensional se da a los 60 años de la demandante, y si era su deseo obtener una pensión en forma anticipada debió elevar una solicitud encaminada a ello, donde se negociara con antelación el bono pensional, lo que llevaría a que este bono a cargo del hospital del Carmen de Amalfi, sufriera una merma, porque la misma ley lo indica que se debe hacer un sacrificio económico; así que condenar a su representada al pago de la prestación desde el año 2017, resulta totalmente contrario a derecho,

porque para ese momento la demandante no contaba con el capital suficiente, no solicitó la pensión anticipada, no solicitó la negociación del bono pensional en forma anticipada, por ende los requisitos que indica la juez más parecen los requisitos del RPMPD, de los 57 años de edad y un tiempo de cotización, debiéndose advertir que el artículo 64 no indica edad alguna, además de que tampoco cumple con las exigencias impartidas en esta norma y tampoco con las exigencias del artículo 65 de la Ley 100 de 1993, que alude a la pensión de garantía mínima, la cual en ningún momento ha sido reclamada por la actora. Considera que la petición elevada por la actora es antes de tiempo, ya cumple 60 años el 10 de marzo de 2020, momento para el cual se hace exigible el valor del bono, debiéndose contar a partir de la citada fecha con 4 meses para que protección reúna la información necesaria y proceda la demandante a solicitar la pensión, elegir la modalidad que desea, informar quienes son los beneficiarios, entre otros pasos, los cuales se ha saltado abiertamente la A quo. Finaliza diciendo que en caso de confirmarse la decisión, se conserve la absolución de los intereses moratorios, ya que para el momento del reclamó la demandante no cumplía con las exigencias a ella aplicables.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Dentro de término oportuno anexó los alegatos el abogado de Protección, quien solicita que se revoque la sentencia, ya que en ningún momento PROTECCIÓN S.A. ha “desconocido” el derecho al bono pensional a que pudiera tener derecho la actora, como en forma desatinada se afirma en la demanda, pues sabe y entiende que la señora *Naranjo* sí tiene derecho a que la Empresa Social del Estado Hospital El Carmen del Municipio de Amalfi, Antioquia, emita en su favor un bono pensional por el tiempo en que la señora *Naranjo* prestó sus servicios sin cotización al sistema general de pensiones para esa entidad, y que el valor que representa ese bono al momento de su redención hará parte del capital necesario para financiar la pensión de vejez de la señora *Naranjo*.

No obstante, entiende y así se lo hizo saber a la actora a través de comunicaciones de 11 de septiembre y de 17 de noviembre de 2017, que el bono pensional que emita la ESE Hospital El Carmen de Amalfi, Antioquia,

NO es negociable en Bolsa, por lo que sólo hasta que la entidad obligada redima el bono pensional no será posible completar el capital que habrá de financiar la pensión de vejez de la actora.

Por tanto, no es un capricho ni una actitud contraria a derecho de la AFP frente a su afiliada, sino que es el desarrollo normal de la preceptiva vigente la cual impide que el bono pensional a que tiene derecho la actora pueda redimirse en forma anticipada ni, por consiguiente, se pueda completar el capital que habrá de financiar la pensión de vejez de la actora, ya que con el capital que existe actualmente en su CAI NO es posible financiar una pensión de vejez normal en los términos establecidos en los artículo 64 y 68 de la ley 100 de 1993.

CONSIDERACIONES

La señora Hilduara del Socorro Naranjo nació el día 10 de marzo de 1.960, como se desprende de la copia de la cédula de ciudadanía inserta a folios 8 del expediente; prestó sus servicios en el hospital ESE Hospital el Carmen de Amalfi desde el 15 de abril de 1979 hasta el 18 de noviembre de 1995, como se desprende del certificado de información laboral (fls. 20 a 30 y 110 a 120); solicitó la pensión de vejez el día 8 de septiembre de 2017, dando respuesta Protección S.A. en comunicado del 11 de septiembre de 2017, informándosele que debía esperar hasta cumplir 60 años para radicar la solicitud formal de la pensión; igualmente se le indica que no es posible efectuar el trámite de pensión a su edad, ya que el emisor del bono es una entidad del sector público, debiendo esperar hasta los 60 años de edad para que dicha entidad realice el pago del título valor y así poder financiar la pensión (fls.9 y 10); también encontramos en el plenario a folios 11 a 13 y 74 a 76, respuesta de Protección del 17 de noviembre de 2017, en la que el fondo, conforme a la solicitud de la actora efectúa una proyección pensional, que arroja una posible mesada, a los 60 años, de \$1'072.113. Por último en los folios 14 a 18, vemos la historia laboral de la actora.

El problema jurídico que nos ocupa se circunscribe en determinar si a la demandante le asiste derecho a la pensión de vejez a partir del 8 de septiembre de 2017, teniendo en cuenta para ello los dineros de la cuenta

de ahorro, los rendimientos financieros y el bono pensional, tema abiertamente discutido en el recurso por el abogado de Protección S.A.

Pues bien, para entrar en materia es necesario revisar los parámetros normativos aplicables al caso en estudio, iniciándose por el artículo 64 de la Ley 100 de 1993 que fija los requisitos para la pensión de vejez en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad. Reza la norma:

“... Los afiliados al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, tendrán derecho a una pensión de vejez, a la edad que escojan, siempre y cuando el capital acumulado en su cuenta de ahorro individual les permita obtener una pensión mensual, superior al 110% del salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de expedición de esta Ley, reajustado anualmente según la variación porcentual del índice de Precios al Consumidor certificado por el DANE. Para el cálculo de dicho monto se tendrá en cuenta el valor del bono pensional, cuando a éste <sic> hubiere lugar...”

Prestación de vejez, que como lo establece el artículo 67 del citado estatuto, se financia con los recursos de las cuentas de ahorro pensional, el valor de los bonos pensionales cuando a ello hubiere lugar, y con el aporte de la Nación en los casos en que se cumplan los requisitos para la garantía de pensión mínima.

Ahora, tenemos que los bonos pensionales se encuentran regulados en los artículos 115 y siguientes de la Ley 100 de 1993 y en el Decreto 1299 de 1994.

El artículo 115 citado dice lo siguiente:

“... Los bonos pensionales constituyen aportes destinados a contribuir a la conformación del capital necesario para financiar las pensiones de los afiliados al Sistema General de Pensiones.

Tendrán derecho a bono pensional los afiliados que con anterioridad a su ingreso al régimen de ahorro individual con solidaridad cumplan alguno de los siguientes requisitos:

- a) Que hubiesen efectuado cotizaciones al Instituto de Seguros Sociales o las cajas o fondos de previsión del sector público;*
- b) Que hubiesen estado vinculados al Estado o a sus entidades descentralizadas como servidores públicos;*
- c) Que estén vinculados mediante contrato de trabajo con empresas que tienen a su cargo el reconocimiento y pago de las pensiones;*

d) Que hubiesen estado afiliados a cajas previsionales del sector privado que tuvieran a su cargo exclusivo el reconocimiento y pago de pensiones....”

En cuanto al cálculo de los bonos pensionales tenemos que el artículo 117 ibídem, establece que una pensión de vejez se calculará así:

a) Se calcula el salario que el afiliado tendría a los sesenta (60) años si es mujer o sesenta y dos (62) si es hombre, como el resultado de multiplicar la base de cotización del afiliado a 30 de Junio de 1992, o en su defecto, el último salario devengado antes de dicha fecha si para la misma se encontrase cesante, actualizado a la fecha de su ingreso al Sistema según la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor del DANE, por la relación que exista entre el salario medio nacional a los sesenta (60) años si es mujer o sesenta y dos (62) si es hombre, y el salario medio nacional a la edad que hubiere tenido el afiliado en dicha fecha. Dichos salarios medios nacionales serán establecidos por el DANE;

b) El resultado obtenido en el literal anterior, se multiplica por el porcentaje que resulte de sumar los siguientes porcentajes:

45%, más un 3% por cada año que exceda de los primeros 10 años de cotización, empleo o servicio público, más otro 3% por cada año que faltare para alcanzar la edad de sesenta (60) años si es mujer o sesenta y dos (62) si es hombre, contado desde el momento de su vinculación al sistema.

La pensión de referencia así calculada, no podrá exceder el 90% del salario que tendría el afiliado al momento de tener acceso a la pensión, ni de quince salarios mínimos legales mensuales.

Una vez determinada la pensión de referencia, los bonos pensionales se expedirán por un valor equivalente al que el afiliado hubiera debido acumular en una cuenta de ahorro, durante el período que haya efectuado cotizaciones al ISS o haya sido servidor público o haya estado empleado en una empresa que deba asumir el pago de pensiones, hasta el momento de ingreso al sistema de ahorro, para que a ese ritmo de acumulación, hubiera completado el capital necesario para financiar una pensión de vejez y para sobrevivientes, a los 62 años si son hombres y 60 años si son mujeres por un monto igual a la pensión de referencia.

En todo caso, el valor nominal del bono no podrá ser inferior a las sumas aportadas obligatoriamente para la futura pensión con anterioridad a la fecha en la cual se afilie al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad.

El Gobierno establecerá la metodología, procedimiento y plazos para la expedición de los bonos pensionales.

PARÁGRAFO 1o. El porcentaje del 90% a que se refiere el inciso quinto, será del 75% en el caso de las empresas que hayan asumido el reconocimiento de pensiones a favor de sus trabajadores.

PARÁGRAFO 2o. Cuando el bono a emitir corresponda a un afiliado que no provenga inmediatamente del Instituto de Seguros Sociales, ni de Caja o fondo de previsión del sector público, ni de empresa que tuviese a su cargo exclusivo el pago de pensiones de sus trabajadores,

el cálculo del salario que tendría a los 62 años si son hombres y 60 años si son mujeres, parte de la última base de cotización sobre la cual haya cotizado o del último salario que haya devengado en una de dichas entidades, actualizado a la fecha de ingreso al Sistema, según la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor del DANE.

PARÁGRAFO 3o. *Para las personas que ingresen por primera vez a la fuerza laboral con posterioridad al 30 de junio de 1992, el bono pensional se calculará como el valor de las cotizaciones efectuadas más los rendimientos obtenidos hasta la fecha de traslado..."*

De la norma transcrita podemos colegir que los bonos pensionales como lo ha indicado el abogado de Protección, en el caso de las mujeres, se redime a los 60 años de edad, y si bien la disposición da la posibilidad al afiliado de pensionarse de manera anticipada redimiendo el bono, ello conforme lo preceptúa el artículo 12 del decreto **1299 DE 1994**, no es posible en el caso de la demandante, pues no se infiere de la prueba que milita en la foliatura, que haya solicitado la redención del bono antes del plazo estimado, requiriendo para ello la autorización expresa y por escrito de la afiliada.

Conforme a los parámetros jurídicos aplicables al caso en estudio, tenemos, como se dijo, que en el RAIS no existe edad alguna para acceder al derecho pensional, pues su prestación está supeditada al ahorro en la cuenta; y si bien la demandante solicitó la pensión de vejez el 8 de septiembre de 2017, para ese momento su bono pensional no era exigible, bono que constituye parte de la financiación de la pensión, y ello por cuanto se desprende de la copia de su cédula, que nació el 10 de marzo de 1960, es decir que los 60 años para redimir este bono, los cumplió los mismos día y mes del año 2020, es decir en el transcurso de este litigio.

Así las cosas, encontramos la viabilidad del reconocimiento de la prestación a favor de la demandante, no desde el 9 de septiembre de 2017, como lo determinó la Aquo, sino desde el 10 de marzo de 2020, momento para el cual cumplió los 60 años, haciéndose redimible el bono, además de que contaba con un capital superior al 110%, situación que se infiere del documento inserto a folios 11 a 13, en el que Protección S.A. en el mes de noviembre de 2017, le realizó una proyección pensional, informándole que **aproximadamente** tendría un capital de \$227'425.776, suma que incluye el bono, lo que daría lugar a obtener para ese entonces, una mesada pensional de \$1'072.113.

Así que el derecho pensional, se reconocerá desde el 10 de marzo de 2020, debiendo eso sí adelantar los trámites correspondientes a la elección de la modalidad pensional, en los términos del artículo 79 de la ley 100, esto es, renta vitalicia inmediata, retiro programado, retiro programado con renta vitalicia diferida o las demás que autorice la Superintendencia Bancaria. Lo anterior, teniendo en cuenta que los trámites respecto de la redención, expedición y demás pasos a seguir con el bono pensional, le corresponden al fondo privado, sin que estos trámites administrativos puedan afectar el derecho pensional de la reclamante, como lo disponen los artículos 20 del Decreto 656 de 1994 y 48 del Decreto 1748 de 1995, que, a la letra, en su orden, disponen:

“...Corresponde a las sociedades que administren fondos de pensiones adelantar, por cuenta del afiliado, pero sin ningún costo para éste, las acciones y procesos de solicitud de emisión de bonos pensionales y de pago de los mismos cuando se cumplan los requisitos establecidos para su exigibilidad...”

“...Corresponde a las entidades administradoras adelantar por cuenta del afiliado pero sin ningún costo para éste, las acciones y procesos de solicitud de bonos pensionales y de pago de los mismos cuando se cumplan los requisitos establecidos para su redención. Las administradoras estarán obligadas a verificar las certificaciones que expidan las entidades empleadoras o cajas, de tal manera que cuando sean recibidas por el emisor, sólo sea necesario proceder a la liquidación provisional del bono y a la solicitud de reconocimiento de las cuotas partes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 52...”

Le asiste parcialmente la razón al abogado del fondo privado, en lo que se refiere a la fecha de causación del derecho, la cual se modificará por esta sala. No sobra advertir que en el caso hipotético de que el fondo privado determine que la pensión de la demandante sería la de garantía mínima, se debe reconocer el derecho desde la fecha en que la accionante consolidó el requisito de la edad para la redención del bono, pues para ese entonces cumplía con creces el requisito de las semanas (1966), como se colige de la historia laboral y anexada por Protección a folios 14 y sgtes.

Sin lugar a costas de segunda instancia, pues protección S.A. obtuvo éxito parcial en esta oportunidad.

FALLO DEL TRIBUNAL

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Quinta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **CONFIRMA PARCIALMENTE** la sentencia de fecha y procedencia indicadas, **MODIFICANDO** la fecha de causación del derecho pensional de vejez a favor de la demandante HILDUARA DEL SOCORRO NARANJO, a partir del 10 de marzo de 2020.

Sin costas de segunda instancia.

Lo decidido se notifica por ESTADOS.

Los Magistrados,



CARLOS JORGE RUIZ BOTERO



VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO



SANDRA MARIA ROJAS MANRIQUE

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN –
SALA LABORAL - HACE CONSTAR

Que la presente providencia se notificó por estados N° 117 del 07
de julio de 2021

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>